

La decisión de Michelle

¿La Presidenta Bachelet va a hacer política para adultos o política para niños en su segundo mandato? En vísperas del anuncio de su primera gran reforma, la tributaria, estamos expectantes acerca de la decisión de la Presidenta sobre cómo va a tratar a los chilenos.

Están las dos posibilidades. La política para niños divide a la población entre buenos y malos. Se está con el líder y se apoya su programa o se está contra él. Se es un "hombre nuevo" y se pertenece a un "país de santos", a la Tironi, o se es un villano. Sus herramientas son la presión, el "bullying", las retroexcavadoras y las piedras.

Nuestro continente conoce y sufre este modelo de hacer política. Chávez fue su mejor exponente y Maduro es la mala copia que deben soportar hoy los venezolanos, con cada vez más restricciones a la libertad y mayor pobreza. Argentina empieza a vivir su propio drama.

Pero hay otra forma de hacer política. Plantear, por ejemplo, que

se quiere alterar el balance existente hoy en la sociedad chilena entre creación de riqueza y repartición de ella. Que no son aceptables los tiempos en que venimos reduciendo la desigualdad en el país.

Esta forma de hacer política conoce los matices. Admite divergencias y soluciones alternativas para lograr los objetivos planteados. Sus herramientas son las reformas. Se nutre de la discusión intelectual, técnica y política.

En materia tributaria esa forma de hacer política debiera admitir, entonces, que cualquier alza de impuestos, en sí misma, aumenta la ineficiencia en la econo-

mía al alterar la decisión de trabajar, de consumir y de ahorrar como lo demuestra la abrumadora evidencia de la literatura especializada.

Pero aún así, la decisión política y técnica puede ser aumentar los impuestos, pues se espera que la recaudación obtenida se transforme en gasto público que

contribuirá a lograr el objetivo de reducir la desigualdad. También es posible idear otros incentivos que atenúen los efectos negativos del alza de impuestos.

Pasa entonces a tener gran relevancia, en esta manera



de hacer política, conocer los proyectos y programas concretos que se pondrían en práctica con los nuevos recursos recaudados. Vale decir, fundamentalmente, las reformas educacionales.

La apuesta del gobierno es que lo que se pierda en productividad por la mayor carga tributaria se recupera con creces por la mejor calidad de educación que recibirán grandes grupos de chilenos que hoy solo acceden a enseñanza de baja calidad. Al mismo tiempo se lograría el objetivo social de reducir la desigualdad.

Suena interesante. El test que corresponde hacer entonces es examinar esas reformas educacionales y ver si ellas tienen posibilidades de lograr el objetivo y cuándo.

Y allí nacen las dudas. Porque la educación gratuita para todos, por tomar solo una de las reformas, aumenta la desigualdad en lugar de disminuirla. De los 3.800 millones de dólares adicionales al gasto actual que se necesitarían cada año, solo el 9% iría a los jóvenes del 20% más pobre que asisten a educación superior, mientras que el 41% pagaría la educación superior del 20% más rico del país. Ningún peso llegaría a los 8 de cada 10 jóvenes del 20% más pobre del país que no asisten a la educación superior, pues tienen otras restricciones personales y familiares más allá del financiamiento.

El gobierno debe dar una explicación más clara de su reforma

educacional. Debatamos sobre ello, es bueno para el país.

En los países que practican política para adultos, no todos tienen la misma opinión sobre las cosas. Hay mayorías y minorías, es cierto, pero hay discusión y un programa de gobierno no se puede imponer como un contrato de adhesión. Eso es abuso.

Por eso es importante también el rol de la oposición. Esta debe ofrecer sus soluciones e intentar moderar los efectos negativos. El daño más grande a la política para adultos se la hacen aquellos que en lugar de formarse convicciones tratan siempre de agradar a la mayoría, asumiendo una mirada infantil del mundo dividido entre buenos y malos. ■

DE LOS 3.800 MILLONES DE DÓLARES ADICIONALES AL GASTO ACTUAL QUE SE NECESITARÍAN CADA AÑO, SOLO EL 9% IRÍA A LOS JÓVENES DEL 20% MÁS POBRE QUE ASISTEN A EDUCACIÓN SUPERIOR, MIENTRAS QUE EL 41% PAGARÍA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 20% MÁS RICO DEL PAÍS.

LUIS LARRAÍN